



**Asamblea General  
Consejo de Seguridad**

Distr.  
GENERAL

A/44/364 ✓  
S/20706  
30 de junio de 1989  
ESPAÑOL  
ORIGINAL: ARABE

**ASAMBLEA GENERAL**

Cuadragésimo cuarto período de sesiones  
Temas 37, 39, 78 y 99 de la lista preliminar\*  
LA SITUACION EN EL ORIENTE MEDIO  
CUESTION DE PALESTINA  
INFORME DEL COMITE ESPECIAL ENCARGADO DE  
INVESTIGAR LAS PRACTICAS ISRAELIES QUE  
AFECTEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LA  
POBLACION DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS  
PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

**CONSEJO DE SEGURIDAD**  
Cuadragésimo cuarto año

Carta de fecha 27 de junio de 1989 dirigida al Secretario General  
por el Representante Permanente de la República Arabe Siria ante  
las Naciones Unidas

En mi carácter de Presidente del Grupo de los Estados Arabes en el mes de junio de 1989, y en nombre de los miembros del Grupo, tengo el honor de adjuntar a la presente el informe preparado de conformidad con la recomendación del Comité Arabe Permanente sobre Derechos Humanos, aprobada por el Consejo de la Liga de los Estados Arabes en su 91º período de sesiones, en virtud de la resolución 4907 de 30 de marzo de 1989.

Agradeceré que tenga a bien hacer distribuir el presente informe como documento oficial de la Asamblea General, en relación con los temas 37, 39, 78 y 99 de la lista preliminar, y del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Ahmad Fathi AL-MASRI  
Embajador  
Representante Permanente de la República  
Arabe Siria ante las Naciones Unidas  
Presidente del Grupo de los Estados Arabes

\* A/44/50/Rev.1.

Anexo

INFORME PRESENTADO AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA LIGA DE LOS ESTADOS ARABES DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACION DEL COMITE ARABE PERMANENTE SOBRE DERECHOS HUMANOS, APROBADA POR EL CONSEJO DE LA LIGA EN SU 91° PERIODO DE SESIONES, EN VIRTUD DE LA RESOLUCION 4907 DE 30 DE MARZO DE 1989

INTRODUCCION

1. El presente informe fue preparado de conformidad con la recomendación sobre las prácticas israelíes contra los derechos humanos aprobada por el Comité Árabe Permanente sobre Derechos Humanos, reunido en Túnez del 3 al 8 de octubre de 1988. El párrafo 1 de dicha recomendación dispone lo siguiente:

"Confiar al Subsecretario General, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, director de la secretaría del Comité, la preparación de un informe amplio sobre las prácticas israelíes contra los derechos humanos, para que el Secretario General de la Liga de los Estados Árabes lo presente al Secretario General de las Naciones Unidas y se distribuya a los órganos internacionales de derechos humanos y demás organizaciones humanitarias."

2. Los instrumentos internacionales que se aplican a la situación de los territorios ocupados, sobre la base de los cuales el presente informe expone las prácticas israelíes contra los derechos humanos, son los siguientes:

2.1 La Carta de las Naciones Unidas, especialmente el párrafo 3 del Artículo 1, que menciona, entre los propósitos de las Naciones Unidas: "Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".

2.2 Los reglamentos que figuran en el anexo al Convenio de La Haya relativo a las leyes y usos de la guerra terrestre, de 18 de octubre de 1907.

2.3 El Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949. Israel accedió al Convenio el 6 de julio de 1951, y las Naciones Unidas han determinado que es aplicable a los territorios ocupados <sup>1/</sup>.

2.4 La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948.

2.5 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966.

---

<sup>1/</sup> Resolución 465 (1980) del Consejo de Seguridad, de 1° de marzo de 1980, y resolución 36/147 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1981.

2.6 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966.

2.7 Las siguientes resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: resolución 43/21 de la Asamblea General, de 3 de noviembre de 1988; resoluciones del Consejo de Seguridad 605 (1987), de 22 de diciembre de 1987, 607 (1988), de 5 de enero de 1988, y 608 (1988), de 14 de enero de 1988.

3. Violaciones israelíes de la integridad política y territorial de los territorios ocupados

3.1 Con la ocupación de Jerusalén en 1967, Israel comenzó de inmediato a tomar medidas preparatorias para su anexión. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado numerosas resoluciones al respecto, algunas de las cuales se señalan a continuación:

Resolución 2253 (ES-V), de 4 de julio de 1967, en que la Asamblea pide a Israel que derogue todas las medidas ya tomadas y que desista en el acto de emprender cualquier iniciativa que pueda alterar la condición de Jerusalén y solicita al Secretario General que informe a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad sobre la situación y sobre el cumplimiento de la resolución a más tardar dentro de una semana de su aprobación;

Resolución 2254 (ES-V), de 14 de julio de 1967, en que la Asamblea, tomando nota con el más profundo pesar y preocupación de que Israel no ha cumplido la resolución 2253 (ES-V), reitera su llamamiento a Israel para que derogue todas las medidas ya tomadas y desista en el acto de emprender cualquier iniciativa que pueda alterar la condición de Jerusalén.

En el mismo contexto, el Consejo de Seguridad ha aprobado las siguientes resoluciones:

Resolución 252 (1968), de 21 de mayo de 1968, en que el Consejo, teniendo presente la necesidad de trabajar por una paz justa y duradera y reafirmando que la adquisición de territorio mediante la conquista militar es inadmisible, deplora que Israel no haya dado cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea General, considera que todas las medidas de carácter legislativo y administrativo tomadas por Israel y los actos que ha ejecutado, incluso la expropiación de tierras y bienes, que tienden a modificar el estatuto jurídico de Jerusalén, son nulos y no pueden modificar ese estatuto, insta urgentemente a Israel a que rescinda todas las medidas de ese tipo ya adoptadas y a que se abstenga inmediatamente de ejecutar cualquier otro acto que tenga por objeto modificar el estatuto jurídico de Jerusalén, y pide al Secretario General que informe al Consejo de Seguridad sobre el cumplimiento de la resolución;

Resolución 267 (1969), de 3 de julio de 1969, en que el Consejo reafirma su resolución 252 (1968), deplora que Israel no haya mostrado consideración alguna para con la resolución 252 (1968) del Consejo de Seguridad, de 21 de mayo de 1968, y las resoluciones de la Asamblea General 2253 (ES-V), de 4 de julio de 1967, y 2254 (ES-V), de 14 de julio de 1967, y determina que, en caso de que Israel

conteste negativamente o no conteste, el Consejo de Seguridad se reunirá sin demora para considerar qué nueva acción ha de emprender respecto de este asunto.

Con todo, pese a las resoluciones anteriormente mencionadas, el Knesset (Parlamento) israelí promulgó una resolución el 30 de julio de 1980, en virtud de la cual se anexaba la Ciudad Santa de Jerusalén y la declaraba capital de Israel. Ello provocó una violenta reacción y repercutió en todas partes en el mundo islámico y cristiano. La Undécima Conferencia Islámica de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Islamabad del 17 al 21 de mayo de 1980, adoptó una resolución en que instaba al Consejo de Seguridad a que se reuniera inmediatamente para considerar la peligrosa situación creada por la decisión de las autoridades israelíes de anexarse Al-Quds Al-Sharif (la Ciudad Santa de Jerusalén) y declararla capital de Israel, y para analizar las graves repercusiones que tendrían las medidas tomadas por Israel y sus consecuencias para las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al logro de una paz justa y duradera en el Oriente Medio.

Asimismo, el Consejo de Seguridad aprobó, el 30 de junio de 1980, la resolución 476 (1980), en la que declara nulas y carentes de valor las medidas adoptadas por Israel para cambiar el carácter de Jerusalén, reafirmando que la adquisición de territorio por la fuerza es inadmisibles, teniendo presente el estatuto especial de Jerusalén y, en particular, la necesidad de proteger y preservar las singulares características espirituales y religiosas de los Lugares Sagrados de la ciudad, recordando las resoluciones anteriormente mencionadas relativas a los Lugares Sagrados de la Ciudad Santa de Jerusalén y su estatuto, expresando su grave preocupación por las medidas legislativas iniciadas en el Knesset israelí con el objetivo de modificar el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, lo que constituye una violación manifiesta del Cuarto Convenio de Ginebra, hace un llamamiento urgente a Israel para que dé cumplimiento a la presente y a las anteriores resoluciones del Consejo de Seguridad y desista de continuar con la política y las medidas que afectan el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y reafirma su determinación, en caso de que Israel no cumpla con la presente resolución, de examinar medios prácticos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, para lograr la aplicación cabal de la presente resolución.

El 20 de agosto de 1980, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 478 (1980), en que decide no reconocer la "ley básica" sobre Jerusalén y hace un llamamiento a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas para que: a) acaten esa decisión; b) los Estados que hayan establecido representaciones diplomáticas en Jerusalén retiren tales representaciones de la Ciudad Santa, y pide al Secretario General que le informe sobre la aplicación de esa resolución antes del 15 de noviembre de 1980 y decide mantener en estudio esta grave situación.

3.2 Alteración del carácter físico y de la estructura geográfica e institucional de la Ciudad Santa.

**3.3 Transformación de la administración militar en administración civil.**

El 1° de noviembre de 1981, en virtud de la Orden Militar 947, las fuerzas de ocupación crearon una administración civil como un paso más hacia la anexión de los territorios ocupados 3/.

**3.4 Introducción de cambios en el aparato judicial, en violación del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 4/.**

**3.5 Destitución de alcaldes y otros miembros de los Concejos Municipales, a despecho de que el Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe que las fuerzas de ocupación modifiquen el estatuto de los funcionarios en los territorios ocupados 5/.**

**3.6 Establecimiento de asentamientos. Todos los planes israelíes sobre establecimiento de asentamientos en los territorios ocupados han confirmado que tienen como fin conservar esos territorios y que la forma más rápida de alcanzar ese objetivo consiste en acelerar el establecimiento de asentamientos.**

El establecimiento de asentamientos en los territorios ocupados viola el artículo 46 del anexo al Convenio de la Haya de 1907 y el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949. El Consejo de Seguridad 6/ y la Asamblea General de las Naciones Unidas 7/ así lo han confirmado unánimemente.

**4. Agresiones israelíes contra los derechos económicos, sociales y culturales**

**4.1 Derogación del derecho de propiedad:** Israel, desde el principio de la ocupación, ha utilizado a sus autoridades en los territorios ocupados para obtener la mayor cantidad posible de tierra, utilizando a ese fin métodos de decepción que constituyen una flagrante violación de los derechos fundamentales de la propiedad. El primero de estos métodos es el de la Ley de la Propiedad de los Ausentes, Orden Militar No. 58, que obliga a obtener la aprobación de las autoridades de ocupación antes de realizar cualquier transacción relacionada con dichas propiedades. Estas prácticas incluyen propiedades de habices musulmanes. La confiscación de tierra en

3/ La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 36/147 C, de 16 de diciembre de 1981, y el Consejo de Seguridad en su resolución 465 (1980), de 1° de marzo de 1980, consideran nulas todas las medidas adoptadas por Israel para modificar la estructura institucional o el estatuto de los territorios ocupados.

4/ "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley."

5/ Artículo 54 del Convenio.

6/ Resolución 465 (1980), de 1° de marzo de 1980.

7/ Resolución 36/147 B, de 16 de diciembre de 1981.

sus diversas formas tiene por objeto transferir la propiedad de tierras pertenecientes a los palestinos a los ocupantes; además, las autoridades de ocupación ponen diversas trabas que impiden a los palestinos ejercer sus derechos. No les permiten construir edificios de más de dos plantas en cada lote de tierra, ni permiten que los pueblos palestinos se amplíen cuando el número de habitantes aumenta a un ritmo elevado. Al mismo tiempo, las colonias de asentamientos judíos se extiende por los territorios árabes y se expanden como el cáncer, en todas direcciones. Hasta el uso del agua de los pozos ubicados en tierras de palestinos está sometido a condiciones rigurosas. Esto viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que afirma que "todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales ... y en ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia" 8/.

Las violaciones israelíes del derecho de la propiedad en los territorios ocupados violan también la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la soberanía permanente de los pueblos y las naciones sobre los recursos y riquezas naturales, en cuyo favor votó Israel 9/. La Asamblea General condenó enérgicamente "la explotación ilegal de la riqueza y recursos naturales y de la población de los territorios ocupados" 10/.

4.2 Obstaculización del desarrollo económico y social. La política israelí en los territorios ocupados tiende a someter a sus propios intereses las condiciones económicas existentes. Esta política ha llevado a vincular la economía de los territorios ocupados a la economía israelí, ya que los territorios ocupados se han convertido en el segundo mercado externo para las exportaciones israelíes. Sin embargo se prohíben la exportación de los territorios ocupados a Israel o se le imponen condiciones imposibles. Las empresas no cuentan con un sistema bancario palestino, suprimido hace tiempo por las autoridades de ocupación; por otra parte, les afecta la resolución que impide el establecimiento de proyectos económicos palestinos que puedan competir con la industria israelí.

Análogamente, se prohíbe la participación de las municipalidades palestinas en proyectos de desarrollo económico 11/. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado esta actitud en numerosas ocasiones, en particular en la resolución 36/147, de 16 de diciembre de 1982.

---

8/ Artículo 1, párr. 2.

9/ Resolución 1803 (XVII), de 14 de diciembre de 1962.

10/ Resolución 36/147 C de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1982.

11/ Así, por ejemplo, las autoridades de ocupación en la municipalidad de Ramallah, prohibieron la inversión de una suma donada por Argelia en un proyecto de desarrollo económico. Fuente: Informe de la Misión de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas a los territorios ocupados, 22 a 28 de mayo de 1982.

Por otra parte, las autoridades de ocupación han recurrido con frecuencia al uso de la economía como arma contra los ciudadanos palestinos o la han utilizado como forma de sanción colectiva; entre esas prácticas se cuentan la tala de árboles frutales, la destrucción de cosechas y el cierre de establecimientos comerciales. Según fuentes noticiosas recientes, las autoridades de ocupación han impedido la recolección de la aceituna en la región de Ramallah y ponen muchos obstáculos a las exportaciones palestinas destinadas a Jordania 12/ en una operación de represalia.

4.3 Explotación de la mano de obra palestina. A los palestinos que diariamente se desplazan de los territorios ocupados para trabajar en Israel, se les prohíbe pernoctar allí, con lo que el trabajador palestino se ve obligado a desplazarse dos veces al día entre su domicilio y el lugar de trabajo y a soportar ocho horas de trabajo más tres horas o más de viaje entre ida y vuelta. En sus relaciones con los empleadores israelíes no gozan de ninguna garantía social, ni sindical; con la agravante de que el obrero palestino no percibe ni la mitad del salario que gana el obrero israelí. Así se viola el Convenio 111 del 25 de junio de 1958 de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, el no reconocimiento de los sindicatos palestinos por parte de las autoridades de ocupación constituye una flagrante violación del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El fenómeno de los palestinos de los territorios ocupados que trabajan en Israel es, por supuesto, resultado directo de la política económica y colonialista aplicada por las autoridades de ocupación en la Faja de Gaza y en la Ribera Occidental, que ha reducido considerablemente los puestos de trabajo y las fuentes de ingresos, creando desempleo entre los palestinos. El Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe en el artículo 52 este tipo de política. En él se dispone que "toda medida que tienda a provocar el paro o a restringir las posibilidades de empleo de los trabajadores de un país ocupado con vistas a inducirlos a trabajar para la Potencia ocupante, queda prohibida".

4.4 Suspensión del proceso de educación en los territorios palestinos. El proceso de educación en los territorios palestinos ocupados ha estado sometido, desde el principio de la ocupación israelí, a las más diversas formas de hostigamiento y prácticas incompatibles con los más elementales derechos humanos en la esfera de la educación. Las autoridades israelíes han puesto todos los obstáculos posibles para impedir la aplicación de las resoluciones de la UNESCO relativas a las instituciones educacionales y culturales, han estorbado la supervisión del funcionamiento del proceso educacional por las partes interesadas y han impedido la cooperación entre los organismos competentes para facilitar los medios necesarios. Las medidas arbitrarias israelíes alcanzan a programas y libros de texto. Las autoridades de ocupación han suspendido la labor sobre los programas de estudio jordano-árabes vigentes, prohibiendo el uso de muchos de los libros aprobados, a raíz de la suspensión de la ley No. 16 de 1964, sobre enseñanza y educación en Jordania, y su sustitución por la ley israelí 564, de 16 de julio de 1969. También mutilaron libros de texto, corrigieron algunos temas y suprimieron otros, y falsificaron la información que en ellos aparecía al tiempo que prohibieron la circulación de varios libros de texto.

---

12/ Agencia de Noticias France Presse, 25 de octubre de 1988.

Además, las autoridades de ocupación intensificaron sus prácticas represivas contra las escuelas e instituciones educacionales. De forma permanente y reiterada, clausuraron y demolieron centros educacionales, incluso escuelas pertenecientes al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Han establecido un régimen férreo sobre los estudiantes mediante arrestos al azar, expulsiones arbitrarias y juicios militares, e imponiendo la residencia obligatoria y la detención administrativa. Estas prácticas se extendieron también a profesores y maestros.

Para conocer todos estos aspectos de la política israelí en los territorios ocupados podemos remitirnos al informe presentado por el Padre E. Boné, de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, quien preparó un informe por encargo de la 23a. Conferencia General de la UNESCO en 1987, en el que abordó en detalle los sufrimientos del pueblo palestino en materia de libertades académicas y las condiciones en que se ejercen en los territorios ocupados.

Al estallar la rebelión popular (intifada), las autoridades de ocupación intensificaron las operaciones de opresión y represión contra los centros educacionales, los estudiantes y los profesores palestinos y, como resultado, el proceso educacional quedó totalmente paralizado.

4.5 Deterioro de las condiciones sanitarias. Las autoridades de ocupación practican diversos métodos e imponen restricciones a fin de destruir la estructura popular de la salud e impedir la construcción de nuevos hospitales. Como consecuencia, y con el aumento de la población, los servicios sanitarios de la comunidad árabe se han deteriorado, lo que es a todas luces evidente por la relación entre el número de médicos y el de habitantes que, según la estimación de 1987, es de sólo un médico por cada 2.900 habitantes para los árabes, frente a un médico por cada 1.800 habitantes en la comunidad judía. Asimismo, la cobertura de la salud no abarca entre los árabes a más de un 15%; comparado con el número de clínicas existentes en la comunidad judía es evidente el déficit de servicios existentes para los palestinos, lo que explica en cierta forma el promedio anual tan bajo de visitas médicas de los niños árabes frente a las de los niños judíos. Si a este déficit de servicios de salud agregamos la mala alimentación y el deterioro de las condiciones materiales, económicas, de vivienda y de vida en general del pueblo palestino en los territorios ocupados entenderemos la elevada tasa de mortalidad en todas las edades frente a la que prevalece entre los judíos.

##### 5. Nuevas tendencias de la política israelí hacia los derechos humanos en los territorios ocupados

El año 1988, año de la conmemoración del 40° aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se caracterizó por una agresión, única en su especie, contra los derechos humanos en los territorios ocupados. Los palestinos, en su patria ocupada, se vieron expuestos a todo tipo de prácticas represivas contra sus personas, propiedades, libertades y contra sus lugares sagrados. La campaña represiva israelí abarcó a todos los ciudadanos palestinos sin excepción, a mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Las fuerzas israelíes de ocupación han recurrido al uso de armas mortales, incluso balas



plásticas, gases tóxicos y munición de guerra, muchas de ellas prohibidas internacionalmente; han utilizado métodos de tortura y represión en las calles, en los hogares y en las prisiones, y han intensificado asimismo sus operaciones de represalia y castigo colectivo contra civiles indefensos. En vista de la extrema gravedad alcanzada, en particular por la evolución más reciente de la política israelí con respecto a los derechos humanos, el contenido de este informe se centrará en los puntos siguientes:

- I. Sanciones colectivas;
- II. Diversos tipos de detenciones;
- III. Represalias;
- IV. Testimonios de delegaciones extranjeras;
- V. Estadísticas.

I. Sanciones colectivas

Imposición del toque de queda, cierre de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza e imposición de un bloqueo total a los habitantes.

Clausura de las universidades y escuelas palestinas en todos los niveles, primario, secundario y medio, de enseñanza por períodos largos de hasta más de tres meses y prohibición de selección del alumnado durante el curso 1987-1988.

Cierre de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, en el mes de marzo de 1988 por tres días consecutivos, y cierre de todos los puntos de tránsito.

Interrupción de la corriente eléctrica, por largo tiempo, en la Ribera Occidental y la Faja ocupada de Gaza.

Corte de las líneas telefónicas y aislamiento de la Faja de Gaza y la Ribera Occidental del mundo exterior en diversas ocasiones.

Despido, a partir del 1° de abril de 1988, de todos los maestros y maestras nombrados a principios de 1988.

Clausura de las instituciones nacionales, sindicales, profesionales y asociaciones de beneficencia, durante seis meses.

Clausura de todas las oficinas del movimiento juvenil, suspensión de sus actividades y arresto de sus miembros.

Imposición de restricciones a las exportaciones de frutas y hortalizas provenientes de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza.

Reducción de las sumas de dinero permitidas a la entrada en los territorios ocupados.

/...

Obstaculización del tránsito por los puentes de los vehículos recargados de productos agrícolas y frutas, lo que provoca mermas.

Alza del costo de los permisos de viaje e impuestos correspondientes a más de 200 dólares de los EE.UU. por vez.

Hostigamiento de los ciudadanos de la Faja de Gaza, al obligarlos a cambiar sus documentos de identidad, lo que les causa pérdidas materiales y les impide trabajar.

Clausura y suspensión de la prensa diaria y de las revistas semanales, en los territorios ocupados, e imposición de un riguroso control sobre los materiales de información.

Imposición de impuestos abrumadores a los comerciantes árabes, así como cierre de sus establecimientos, rotura de cerraduras de sus locales, saqueo de almacenes e imposición de multas a algunos de ellos.

Expropiación de tierras y fuentes de agua, así como tala de plantaciones y olivos, y construcción de amplias carreteras a fines militares y de asentamiento, impidiéndoles a los agricultores recoger sus cosechas.

## II. Diversos tipos de detenciones

### 1. Operaciones de arresto

Cualquier militar israelí puede arrestar a cualquier palestino en los territorios ocupados, so pretexto de que está relacionado con alguna acción violatoria de la seguridad.

Los militares pueden mantener en prisión a un detenido durante cuatro días. Sólo con recibir una orden de arresto de un oficial de la policía, el período de arresto se prorroga inmediatamente a siete días más y puede llegar hasta 11 días. Estos 11 días pueden prorrogarse otros siete días más, y así convertirse en 18 días, sin ser juzgado. Después de ese período, un tribunal militar puede extender el arresto hasta seis meses.

### 2. Función de la defensa

Todo contacto entre el abogado y su cliente palestino detenido depende de la decisión del director del establecimiento penitenciario quien puede impedir, como ocurre a menudo, que se lleve a cabo la entrevista si no está convencido de que en ella sólo se abordarán cuestiones jurídicas relacionadas con el detenido y de que tal contacto no afectará al curso de las indagaciones.

### 3. Abusos de la policía en la fase de indagación

La policía obtiene confesiones en las siguientes condiciones:

Utilizando violencia contra los detenidos para arrancar las confesiones por la fuerza;

Sin la presencia de intérprete elegido por el detenido;

Transcripción en hebreo de las declaraciones del detenido, aunque desconozca esa lengua.

El informe "Landau", preparado por una Comisión Gubernamental Israelí en octubre de 1987, refleja numerosas violaciones de las normas indagatorias. Según ese informe, es lamentable y penoso que los agentes de la Shin Beth (el Servicio de Inteligencia interior israelí) cometan violaciones tan grandes en sus prácticas, tanto individual como colectivamente; las confesiones que arranca la policía al acusado son las pruebas fundamentales que se esgrimen en los tribunales civiles y militares en contra del detenido. La Comisión redactora del informe afirma que los que interrogan al acusado recurren al uso de la violencia física, porque sin esos métodos el interrogatorio no resulta provechoso. La Comisión considera que, en la mayoría de los casos, la confesión del acusado durante el interrogatorio es la única prueba existente en su contra.

#### 4. Juicios y constitución de los tribunales

Los tribunales militares israelíes de las zonas ocupadas están compuestos de un oficial y dos abogados que son reservistas del ejército y han sido designados por el Ministerio de Defensa. En las Ordenes Militares No. 378, para la Ribera Occidental, y No. 1970, para la Faja de Gaza, se estipula que el gobernador militar del distrito debe nombrar oficiales con rango de capitán o un rango superior, con formación jurídica, para que cumplan funciones de jueces, y que dichos oficiales podrán ser militares profesionales o reservistas. El decano de los abogados israelíes de Jerusalén ha afirmado que toda selección de jueces que se haga de esa forma es incompatible con el principio de imparcialidad y que le merece dudas la legalidad de la constitución de dichos tribunales en vista de lo dispuesto en el inciso d) del párrafo 1) del artículo 3 del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966.

Las leyes que aplican los tribunales militares israelíes son incompatibles con el artículo 67 del Convenio de Ginebra, en el que se estipula que: "Los tribunales sólo podrán aplicar disposiciones legales anteriores a la infracción y conforme a los principios legales del derecho, especialmente en lo que concierne al principio de la proporcionalidad de las penas". Es evidente que los tribunales militares israelíes de las zonas ocupadas dictan fallos arbitrarios en que no se tiene en cuenta la ley escrita de las zonas ocupadas vigente antes de la ocupación. Esta es una infracción del artículo 65 del Convenio de Ginebra.

Los juicios se instruyen de manera incompatible con el artículo 72 del Convenio de Ginebra en lo relativo a la necesidad de que el tribunal esté regularmente constituido y dotado de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Los tribunales no respetan este artículo por cuanto:

a) La manera que se obtienen confesiones de los detenidos es ilícita; el hecho de que las confesiones se registren en hebreo es ilícito, y esas confesiones son las únicas pruebas que se presentan al juez;

/...

b) El fiscal presenta exclusivamente al juez pruebas secretas de las que no tienen conocimiento el acusado ni su abogado, de forma incompatible con el artículo 72 del Convenio de Ginebra;

c) En algunos casos, no se anuncia la fecha del juicio y, en todos los juicios, se limita exageradamente el número de personas del público que pueden asistir a ellos.

#### 5. Detención administrativa

5.1 El 4 de agosto de 1985 el Gobierno de Israel volvió a implantar la detención administrativa en los territorios ocupados tras haberla abolido a principios del decenio de 1980 debido a las protestas que había causado en Israel y en el extranjero. La detención administrativa es una manera de ejercer presión y de chantajear a los ciudadanos palestinos. Se logra esto aplicando la medida de manera excesiva y gracias a la falta de recursos legales para los detenidos.

5.2 La detención administrativa consiste en un encarcelamiento sin formulación de cargos y sin instrucción de juicio.

5.3 El comandante militar o su adjunto están facultados para imponer detenciones administrativas.

En el inciso b) del artículo 87 de la Orden Militar No. 378 se señala que los jueces pueden desestimar la Ley de Detenciones si se demuestra que la acusación que pesa sobre el detenido no afecta al orden público ni a la seguridad del Estado. De esa forma, corresponde al detenido probar que es inocente de cualesquiera acusaciones que afecten a la seguridad del Estado; esto significa que la carga de la prueba recae en el detenido y no en el ministerio público.

Las pruebas principales que se presentan a los tribunales militares y, ulteriormente, al Tribunal Superior de Justicia son secretas y no pueden ser reveladas al acusado ni a su abogado. A ese respecto, en el artículo 9 de la Orden Militar 12/4 se estipula que los documentos relacionados con los asuntos expuestos en el inciso d) del artículo 87 no han de presentarse a los detenidos ni a sus abogados. Por consiguiente, el término detención administrativa significa privación de libertad y encarcelamiento por las autoridades militares durante un período no especificado sin que se revelen los cargos que pesan sobre el encarcelado.

#### 6. Detención y encarcelamiento de niños

En el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 se considera que son niños todas las personas de menos de 15 años de edad (artículos 24, 38 y 50). En el artículo 64, el Convenio subraya la necesidad de que se conserve el régimen jurídico existente antes de la ocupación. En el derecho jordano se estipula que la edad de responsabilidad penal comienza a los 17 años. En la Orden que rige el enjuiciamiento de niños que aplican actualmente las autoridades de ocupación se estipula lo siguiente:

Seis meses de prisión para los niños de 12 a 14 años de edad;

Un año de prisión para los niños de 14 a 16 años de edad;

La edad que rige es la de la fecha del veredicto y no la de la fecha de comisión del delito; por lo tanto es viable y posible enjuiciar a personas de 12 años de edad;

Si no se paga una multa en dinero efectivo, el padre o guardián del niño debe asumir esa responsabilidad y puede ser encarcelado en lugar del niño.

Cabe hacer notar que los niños son encarcelados en prisiones públicas, junto a presos adultos, desde el momento de su detención.

#### 7. Tortura y represión en las cárceles

En abril de 1982, Rafael Eitan, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Israel, hizo público un documento en el que se estipulaban las directrices de la política israelí de represión. En el documento se exhorta a que se adopten métodos concretos para imponer un control absoluto sobre el pueblo palestino. Se señala que es necesario utilizar la fuerza contra los agitadores y los participantes en protestas, así como encarcelarlos cada vez que haya la oportunidad de hacerlo. En caso necesario, deben emplearse medios legales que permitan encarcelar a dichas personas a fin de interrogarlas (sin juicio) durante el período establecido por la ley. Luego pueden ser dejados en libertad uno o dos días antes de volver a ser encarcelados y torturados. Este y varios otros documentos vinieron a conocerse durante el juicio de siete soldados israelíes realizado en diciembre de 1982.

La Orden Militar No. 378, originada en la Oficina del General Eitan, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Israel, permite la detención de palestinos y su encarcelamiento sin fianza por un período de no más de 18 días antes de que se les instruya juicio.

The Jerusalem Post, en su edición del 26 de marzo de 1984, informó de la afirmación de que se sometía a los detenidos palestinos a torturas, tratos brutales y condiciones de vida inhumanas a fin de quebrar su resistencia. El periódico indicó que los detenidos eran apaleados, desnudados y sometidos a actos sistemáticos de humillación; se detenía a inocentes y se les confinaba en cuartos de baño y celdas anegadas.

### III. Represalias

#### 1. Zonas obligatorias de residencia

En virtud de esta medida, se prohíbe a los palestinos mudarse a determinadas zonas o salir de otras. Esta medida se basa en los artículos 108 y 110 de la Ley de Emergencia de 1945 impuesta por las autoridades británicas. Los períodos de residencia obligatoria no son fijos y van de tres meses a cuatro años. Las personas a las que se impone residencia obligatoria y sus abogados no reciben información de los motivos de la medida.

/...

En el fallo dictado por el Tribunal Superior de Israel en el caso No. 36/981 se indica que la autoridad estipulada en la ley es preventiva, se aplica con referencia a actos futuros y sólo puede ponerse en práctica si hay necesidad de protección de un peligro evidente. Esto significa que las autoridades israelíes juzgan más bien lo que sucederá en el futuro que los incidentes que ya han ocurrido.

## **2. Uso de gases tóxicos**

En un informe sobre la utilización de gases tóxicos contra civiles y niños presentado al Concilio de Iglesias del Oriente Medio tras una visita realizada a los territorios ocupados a principios de febrero de 1988, el Reverendo Donald E. Wagner, Director de la Campaña de Protección de los derechos humanos de Palestina, con sede en la ciudad norteamericana de Chicago, señaló lo siguiente:

"El 9 de febrero visité el campamento de refugiados Dohaisha, situado cerca de Belén, en la Ribera Occidental ocupada por Israel. Un niño de 9 años que el día anterior había estado a punto de ser secuestrado por colonos israelíes militantes cerca de su casa, me enseñó una cápsula usada de gas lacrimógeno que había sido disparada al campamento de Dohaisha el fin de semana anterior. Luego fui llevado a la casa de una joven madre de 24 años que el 9 de febrero estaba en su séptimo mes de embarazo cuando se lanzó una granada de gases lacrimógenos al interior de su casa a la hora de comer. Al día siguiente sufrió un aborto. Caminamos a la casa para darle el pésame y su hermana nos dijo: 'No está. Tuvo que ir al hospital esta mañana para que la operaran'.

La granada de gas lacrimógeno era un cilindro plateado de aproximadamente una pulgada y media de ancho y seis pulgadas de largo. Al examinarla, se desprendió un polvillo negro de tres agujeros situados en la base. El polvillo me irritó los ojos y me provocó escozor en una cortadura que tenía en la cara.

En el cilindro venía la siguiente inscripción: '... FEDERAL LABORATORIES, INC., Pennsylvania 15681, USA ... Made in the USA 123456789 MFG 1988'."

En su informe el ministro indica que la muerte de fetos en el útero materno es un grave fenómeno muy generalizado durante el levantamiento; el OOPS ha corroborado ese hecho e iniciado un estudio epidemiológico de la grave situación a que da lugar. Indica que las pruebas que ha presentado demuestran que Israel libra una guerra química contra los habitantes palestinos de la Ribera Occidental y Gaza. Al término de su informe, el Reverendo Wagner exhorta a los órganos legislativos de los Estados Unidos a que determinen si el envío de gases lacrimógenos a Israel en enero de 1988 constituyó una violación de la Ley de Control de Exportación de Armas (1977) u otros instrumentos o leyes.

## **3. Demolición y clausura de casas**

Esta medida, cuyos orígenes se encuentran en el artículo 119 de la Ley de Emergencia de 1945 impuesta por las autoridades británicas, se adopta contra las personas que se sospecha han desarrollado actividades lesivas a la seguridad. Esto

/...

significa que se puede demoler un inmueble en que vivan varias familias sin parentesco entre sí aun cuando el acusado no sea dueño del inmueble. La decisión de demoler o clausurar un edificio es prerrogativa del gobernador militar y se ejecuta de inmediato, de manera que no hay posibilidades de apelar a la Corte Superior.

En 1985, Moshe Yangavi, Jefe de la Sección de Derecho Internacional del Ministerio de Defensa de Israel, explicó que tan pronto una casa es demolida o clausurada pasa a constituir zona militar, por lo que no se plantea la cuestión de que haya posibilidades reales de apelar a la Corte Superior.

Cabe hacer notar lo siguiente:

El castigo es de índole general y fortuito y perjudica a personas que no han sido acusadas de ningún hecho concreto;

La decisión de demoler o clausurar un edificio puede fundarse en motivos de seguridad respecto del distrito y para que la medida se lleve a cabo no es necesario que se hayan formulado cargos concretos.

#### 4. Erradicación y expulsión

Hay un procedimiento israelí que se manifiesta, en sus primeras etapas, por la expulsión de grandes números de dirigentes y jóvenes palestinos de su patria ocupada y que tiene varios objetivos. Los más importantes de éstos son intimidar a los dirigentes del levantamiento, habida cuenta que, al expulsarlos, se les separa de sus familias, se cortan todos sus vínculos con el país y se desarticulan sus lazos de relación e intereses, y expulsar a personalidades concretas a fin de que el levantamiento quede sin dirigentes.

Fundamentalmente, la expulsión debe considerarse un elemento importante de la estrategia de Israel que tiene por objeto erradicar gradualmente a los habitantes del país y situar allí colonias y colonos de manera de eliminar la identidad árabe palestina del lugar.

En el artículo 49 del Convenio de Ginebra se prohíben las deportaciones fuera del territorio ocupado, fuere cual fuere el motivo. Se permiten evacuaciones sólo si así lo exigen la seguridad de la población o imperiosas necesidades militares. En todos los casos, según ese artículo, las evacuaciones sólo pueden tener lugar al interior del territorio ocupado, excluyéndose los traslados fuera del territorio ocupado. Se señala, además, que la población así evacuada debe ser devuelta a sus hogares tan pronto como hayan terminado las hostilidades en el sector de que se trate.

Los procedimientos de expulsión son los siguientes:

El gobernador militar extiende una orden de deportación contra cualquier persona sobre la base del artículo 1128 de la Ley de Emergencia impuesta por las autoridades británicas;

/...

La persona objeto de una orden de deportación puede apelar al comité consultivo del distrito en que se haya extendido la orden. Este comité, a su vez, extiende una recomendación que puede o no ser aceptada por el gobernador militar. Cabe observar que el gobernador militar tiene más rango que los miembros del comité consultivo;

Si el gobernador militar insiste en la deportación, la persona contra la que se ha dictado la orden puede solicitar la intervención de la Corte Superior. No obstante, la orden de deportación se funda en razones consideradas secretas que no pueden ser dadas a conocer al deportado ni a su abogado;

La Corte Superior no examina el fondo de la cuestión, representado por las pruebas presentadas en justificación de la orden de expulsión, sino que se limita a determinar si el gobernador militar tomó o no su decisión basándose en una acusación que pone en peligro la seguridad del Estado y el orden público.

#### 5. Palizas y fracturas de huesos

La Comisión Internacional de Juristas y de Derecho al Servicio de la Humanidad ha declarado que las heridas se concentran en las extremidades. Todas las fracturas corresponden a manos, piernas, brazos y rodillas, lo que indica que las piernas se encontraban en posición extendida y habían sido fracturadas deliberadamente. Ello también indica que no se fracturaron en defensa propia ni en palizas corrientes. La Comisión ha indicado también que los heridos de Gaza se encuentran en una situación diferente, ya que sus heridas se concentran en la cabeza, además de los detenidos que han sufrido fracturas en las piernas.

En una carta dirigida a The Jerusalem Post y publicada en ese diario el 11 de febrero de 1988, el Profesor Stanley Cohen, residente de Jerusalén, hace un llamamiento para que se ponga término a la "ocupación destructiva" de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza. En su carta, señala que diversos juristas, en declaraciones publicadas en Israel los días 25 y 26 de enero de 1988, señalaron que la utilización de palizas como castigo corporal sumario era "manifiestamente ilegal" y que a toda persona que ordenara o llevara a cabo tales palizas le cabía responsabilidad penal por ellas.

El 11 de febrero de 1988, en la página 2 de The Jerusalem Post, se publicó un artículo de Dvorah Geltzler. En una carta enviada por Chaïke Grossman (Mapam) y Ran Cohen (Movimiento de Derechos Civiles) dirigida al Ministro de Defensa Yitzhak Rabin, se resumía el testimonio de varios reservistas, indicándose las fechas y horas exactas de los acontecimientos. En la carta se insistía en que debían suspenderse las órdenes de golpear y fracturar extremidades. De no ser así, los dos remitentes llevarían la cuestión a los tribunales. En la carta se añadía que las fuerzas israelíes de ocupación habían capturado a un grupo de 17 muchachos y hombres jóvenes de 17 a 20 años. Se les habían atado las manos y se les había hecho tenderse en la calle. A continuación, los soldados de la Brigada Golani habían comenzado a darles culatazos y bastonazos. Una vez que el grupo había sufrido lesiones severas en todo el cuerpo, se había recibido la orden, por radio, de que se les soltara. La respuesta fue: "¡Ya no se pueden mover!". Quince de ellos fueron cargados en un camión, llevados a un wadi y descargados luego en el valle.



6. Descargas de armas de fuego contra manifestantes

La Comisión Internacional de Juristas y de Derecho al Servicio de la Humanidad ha estimado que más del 50% de los heridos han sido baleados con munición de guerra. Las heridas se concentran en las piernas, de manera que los heridos queden inválidos. Se usan balas de alta velocidad, que causan fracturas y lesiones internas a las arterias. Las heridas de la parte inferior del cuerpo producen complicaciones médicas y las de la parte superior del cuerpo son indefectiblemente fatales. La mayor parte de los heridos que han recibido tratamiento han sido blanco de balas dum-dum, proscritas internacionalmente, que son las que causan las heridas más graves.

En la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, el Ejército de Israel emplea unidades de eliminación física. Los miembros de estas unidades van vestidos de civil y tratan de eliminar a las personas activas en el levantamiento. Esto ha sido confirmado por el corresponsal de la Agencia Reuters en Jerusalén. Ha señalado que en la Ribera Occidental desarrolla actividades una unidad militar secreta que actúa con el nombre en clave "Duvdevan" ("Cereza") y otra en la Faja de Gaza con el nombre en clave "Shimshon" ("Sansón"). Entre los métodos que utilizan las unidades Duvdevan y Shimshon, según fuentes extranjeras, se cuentan los de hacerse pasar por árabes, mezclarse con los manifestantes para capturar a personas bien conocidas y descolantes, y hacerse pasar por periodistas para detener o fotografiar a sospechosos.

El corresponsal de la Agencia Reuters ha informado que el 9 de octubre de 1988, en la aldea de Yata, cerca de Hebrón, miembros de la unidad Duvdevan asesinaron a dos jóvenes árabes buscados por las autoridades israelíes. El 17 de octubre de 1988, en el periódico israelí Ha'aretz se publicaron entrevistas con parientes de los dos jóvenes y con testigos oculares quienes indicaron que había llegado a la aldea un vehículo Ford Transit con placas locales en el que viajaban siete personas de civil. Los pasajeros, tras identificar a los dos jóvenes del caso, Kamal Muhammad Hasan, de 23 años, y Fadl Ibrahim Shahhadah al-Najjar, de 25, abrieron fuego contra ellos a corta distancia y les dieron muerte.

IV. Testimonios de delegaciones extranjeras

1. Informe de la Asociación Parlamentaria de Cooperación Euro-Árabe

La Asociación de Cooperación Euro-Árabe, que envió un comité de investigación del 31 de enero al 5 de febrero de 1988 a Israel y los territorios árabes ocupados, indica lo siguiente:

1) Las autoridades israelíes impidieron que los miembros del Comité ingresaran en los campamentos y en las zonas sujetas a toque de queda para dar tratamiento a los heridos. En los puestos de control los israelíes se apoderaron de los vehículos de primeros auxilios y los utilizaron como caballos de Troya para ingresar a esas zonas y matar, golpear y detener a residentes.

2) Los hospitales fueron invadidos y atacados, se destruyó equipo y otros implementos, se arrancó a los pacientes de sus camas para detenerlos y los médicos fueron objeto de palizas y actos humillantes.

/...

3) El programa de inmunizaciones y de cuidados prenatales ha sido objeto de obstrucciones, sobre todo en Gaza.

4) En los campamentos se corta el agua tres y cuatro días a la semana y en muchos campamentos escasean los alimentos y los suministros médicos; asimismo, la basura se acumula debido a las dificultades que experimenta el personal encargado de recogerla.

El Comité recomendó que el "enemigo armado" no utilizara munición de guerra para reprimir a manifestantes desarmados. El Comité publicó un largo artículo sobre las condiciones imperantes en los territorios árabes ocupados durante el levantamiento, condiciones que apreció directamente, en el periódico Le Monde del 13 de febrero de 1988.

Los miembros del Comité subrayaron que habían visto a unos seis soldados jóvenes que patrullaban los campamentos portando bastones y que habían lanzado gas CS-5 a un grupo de mujeres que habían tardado en entrar en uno de los centros de la ciudad; las mujeres llevaban fotografías de Yasser Arafat y cantaban canciones nacionalistas. No se justificaba el uso de fuerza.

El Comité visitó diversos hospitales donde los médicos les informaron de que algunos de los pacientes que recibían tratamiento habían sido heridos con balas dum-dum, que son las que causan las heridas más graves.

En el hospital, el Comité visitó a una niña con quemaduras graves sufridas cuando un soldado israelí le había derramado encima un jarro de agua hirviendo.

## 2. Informe de la delegación del Partido Liberal del Reino Unido

En junio de 1988, seis meses después del comienzo del levantamiento, el Partido Liberal del Reino Unido envió una delegación a los territorios palestinos ocupados. La delegación afirmó que continuaba el fervor del levantamiento pero que la prensa occidental aún no comenzaba a ocuparse de los sucesos pertinentes ni a informar sobre ellos con el entusiasmo debido. La censura militar impuesta por las fuerzas de Israel respecto de lo que sucedía en los territorios ocupados era una de las causas de que las noticias no llegaran a las agencias de prensa mundiales.

Los elementos básicos que subrayó la delegación en su informe fueron los siguientes:

1) La delegación subrayó que las autoridades de ocupación impedían que los palestinos establecieran nuevas industrias.

2) Israel imponía tributos a los habitantes palestinos en contravención de los Convenios de Ginebra.

3) El Alcalde de la Municipalidad de Hebón había señalado a la delegación que los palestinos de los territorios ocupados tributaban anualmente unos 1.000 millones de dólares en impuestos directos e indirectos y que recibían servicios por sólo la tercera parte de esa suma.

4) Los israelíes habían confiscado la tercera parte de la superficie sembrada de cítricos. Habían impedido la exportación y cortado el agua al extremo de que los árboles no podían crecer ni sobrevivir.

5) Los israelíes, en contravención de la ley, explotaban el trabajo de menores en la Faja de Gaza. Ariel Sharon había sido uno de los primeros en emplear niños en su granja del desierto de Negev. Hacían trabajar a los niños de noche para que los observadores de las autoridades israelíes no los vieran.

6) La proporción de graduados universitarios palestinos era relativamente alta, pero las oportunidades de trabajo eran muy limitadas, sobre todo en la Faja de Gaza. Ello había obligado a que personas con diplomas de altos estudios y graduados universitarios trabajaran en explotaciones agrícolas, restaurantes y cafés, en la industria de la construcción y en estaciones de servicios.

7) El problema principal de la infraestructura era el del agua. En 1936 se había excavado un pozo en la Ribera Occidental para atender a las necesidades de 20.000 personas. Posteriormente no se habían excavado más pozos, pese a que la población había aumentado más de cinco veces. Los israelíes prohibían la excavación de nuevos pozos por los palestinos pero permitían que los colonos israelíes que se encontraban allí ilegalmente excavaran los pozos que necesitaban. Por ejemplo, las reservas de la ciudad de Hebrón eran para los colonos y las tuberías de agua se habían hecho llegar a la colonia de Kiryat Arba. Si llegaba a haber cualquier reducción en las reservas de agua, se cortaba el suministro a Hebrón pero se mantenía sin cambios el suministro a la colonia. Los habitantes de Hebrón pagan, en concepto de agua, cinco veces más que los colonos israelíes.

8) Las autoridades de ocupación prohíben que se entre o salga de Gaza. La mayoría de los pueblos y aldeas palestinos se encuentran en un estado de sitio total.

9) Desde el comienzo del levantamiento, se ha impedido que los palestinos de 16 a 40 años reciban visas para salir de los territorios ocupados.

10) Los israelíes han confiscado hasta ahora más del 50% de la superficie de los territorios ocupados.

11) Las autoridades detienen a grandes números de palestinos sin someterlos a juicio. Nadie pudo proporcionar a la delegación el número exacto de presos y detenidos. Las cifras fluctúan entre 7.000 y 15.000 personas.

12) Desde los comienzos del levantamiento, los israelíes han venido reuniendo a todos los detenidos durante mucho tiempo por motivos políticos en un nuevo centro de detención "Ansar 3" situado en el desierto del Negev. En esta cárcel no hay agua, servicios sanitarios ni alimentos adecuados; hay, asimismo, infestaciones de ratas, víboras y escorpiones. La norma es administrar palizas al azar.

13) Desde el comienzo del levantamiento los establecimientos de enseñanza se han cerrado durante períodos prolongados; las siete universidades palestinas han estado cerradas durante todo el período del levantamiento.

14) Antes de que comenzara el levantamiento, se dictó la Orden Militar No. 854 por la que se impedía a los estudiantes a entrar en la universidad sin previa autorización de las autoridades militares. Restricciones análogas pesan sobre el personal docente, los estudiantes y los funcionarios.

15) Los textos y programas de estudio están sujetos a una censura estricta, lo que crea dificultades reales muy graves.

16) Los castigos colectivos de que son objeto los habitantes de los territorios ocupados constituyen una violación grave de los Convenios de Ginebra. Otra práctica común es la demolición y destrucción de viviendas. La delegación vio un gran número de casas destruidas en todos los sectores de los territorios ocupados. Los habitantes se ven obligados a vivir en tiendas levantadas a corta distancia de las viviendas destruidas, y se les ha prohibido reconstruirlas.

El 16 de febrero de 1988, en The Independent, el corresponsal Charles Richards indicó que las fuerzas armadas israelíes habían sacado a la fuerza a cuatro jóvenes palestinos de sus casas de la aldea de Salim, los habían golpeado con gran violencia, los habían obligado a tenderse en el suelo y habían utilizado un tractor para echarles tierra encima y enterrarlos vivos. No obstante, los habitantes de la aldea se habían precipitado a desenterrarlos tan pronto los israelíes se hubieron alejado. Las víctimas todavía estaban vivas pero dos se habían desvanecido.

3. Informe correspondiente a 1988 presentado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos sobre prácticas en materia de derechos humanos

Las leyes y los reglamentos administrativos israelíes prohíben explícitamente actos de ese tipo (torturas y cualquier castigo o trato cruel, inhumano o humillante) y establecen penas para actos de esa naturaleza. Sin embargo, cuando se plantean necesidades de seguridad, esas restricciones cambian y se producen violaciones. El informe Landau, publicado en 1987, indicó que el servicio general de inteligencia israelí, denominado Shin Bet (Servicio General de Seguridad) recurría sistemáticamente a las presiones físicas y mentales para obtener confesiones.

Los ciudadanos israelíes tienen permiso para circular libremente dentro del país, excepción hecha de las zonas de seguridad y en casos de emergencia o en que se haya promulgado una orden administrativa. En 1988 se restringió la libertad de circulación de dos árabes israelíes, quienes fueron sometidos a arresto administrativo el mismo año. Los israelíes tienen derecho a circular y viajar por las zonas ocupadas, con excepción de aquellas clausuradas temporalmente y declaradas zonas militares.

Los habitantes palestinos de los territorios árabes ocupados en general pueden circular y viajar por Israel. Sin embargo, los habitantes de los territorios ocupados que trabajan en Israel deben tener un permiso especial para poder pasar la noche en Israel. Este requisito normalmente no se aplica. Los palestinos, y particularmente los jóvenes, no pueden entrar a Jerusalén los viernes, que es el día sagrado para el Islam.

Los ciudadanos israelíes tienen permiso para viajar y emigrar, siempre que hayan cumplido el servicio militar y no pesen sobre ellos restricciones de índole administrativa. No obstante, en 1988 se prorrogaron las restricciones impuestas para el viaje de dos árabes israelíes que eran miembros de la Lista Progresista del Partido de la Paz. Se trataba de restricciones para viajar al extranjero y a los territorios árabes ocupados. El Gobierno israelí no dio ninguna explicación oficial para imponer esas restricciones.

El concepto israelí de compensación aplicada a los judíos se basa en el derecho al retorno y en el derecho de todo judío a obtener la nacionalidad israelí, que incluye a los judíos israelíes que han emigrado de Israel. Los ciudadanos árabes que vivían en Palestina en la época del Mandato y que se fueron de la zona que en 1948 pasó a ser el Estado de Israel no gozan del derecho al retorno.

"Los Estados Unidos consideran que la ocupación de Israel se rige por el Reglamento de La Haya de 1907 y por el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra. Israel niega la aplicabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra a la Ribera Occidental y a Gaza, pero afirma cumplir las disposiciones humanitarias del Convenio en esas zonas. Israel aplica la legislación jordana en la Ribera Occidental y la legislación del Mandato británico en Gaza, en conjunción con sus propias ordenanzas militares, que han introducido cambios importantes en esas legislaciones.

Los disturbios civiles, que reflejan la oposición palestina a la ocupación, han dado lugar a una serie de estallidos de violencia en los últimos 21 años, los cuales a su vez han dado lugar periódicamente a intervenciones enérgicas de las fuerzas militares israelíes. A partir de diciembre de 1987, la ocupación inició una nueva etapa, denominada intifada, en que los disturbios civiles se hicieron más generalizados e intensos que nunca. Los principales protagonistas de estos disturbios civiles han sido fundamentalmente jóvenes de ambos sexos motivados por el nacionalismo palestino y por el deseo de poner fin a la ocupación. Se han reunido en grupos, han declarado y realizado huelgas, han arrojado piedras y bombas incendiarias contra las fuerzas de seguridad y vehículos civiles israelíes, y han levantado barricadas y quemado neumáticos para entorpecer el tráfico. El Gobierno israelí considera que este levantamiento es una nueva etapa de la guerra de 40 años contra Israel y una amenaza contra la seguridad del Estado. Las fuerzas de defensa israelíes, tomadas de sorpresa y carentes de entrenamiento y experiencia en el control de disturbios, respondieron de una manera que ha dado lugar a un incremento considerable de las violaciones de los derechos humanos.

En centenares de confrontaciones entre las tropas de las fuerzas de defensa israelíes y palestinos que arrojaban piedras y cócteles Molotov o que participaban en otros tipos de desorden, las fuerzas de defensa israelíes con frecuencia respondieron con disparos de armas de fuego que provocaron bajas. No se cuenta con cifras exactas sobre las bajas, y los cálculos varían según las fuentes y los criterios utilizados para el recuento. Cifras procedentes de despachos de prensa de grupos palestinos y del Gobierno israelí indican que

en 1988 murieron 366 palestinos como resultado del levantamiento, la mayoría de ellos a manos de las fuerzas de defensa israelíes y algunos a manos de colonos israelíes. Trece palestinos fueron muertos por otros palestinos por ser sospechosos de colaborar con las autoridades israelíes. Más de 20.000 palestinos resultaron heridos o lesionados por las fuerzas de defensa israelíes. Once israelíes han muerto de resultas de la intifada. Según estadísticas de las fuerzas de defensa israelíes, unos 1.100 israelíes resultaron heridos.

La mayoría de las muertes de palestinos se produjeron de resultas del uso de balas redondas de servicio de alta velocidad disparadas por las fuerzas de defensa de Israel para poner fin a incidentes de pedreas y bombas incendiarias o para perseguir a sospechosos. Las reglamentaciones de las fuerzas de defensa israelíes permiten utilizar munición de guerra cuando la vida de los soldados está en peligro real e inmediato. Sólo se puede disparar en caso de agresión efectiva y el fuego debe dirigirse exclusivamente a las piernas; se puede disparar contra sospechosos que huyan sólo como último recurso y cuando se sospeche que han cometido un delito grave. Los soldados pueden disparar únicamente tras haber agotado todos los demás medios, tales como gases lacrimógenos, balas de goma y disparos de advertencia. Estas directrices a menudo no se han seguido. Los soldados frecuentemente dispararon en situaciones en que no había peligro de muerte para las tropas, con lo cual causaron muertes y heridas que se habrían podido evitar.

En septiembre la política de las fuerzas de defensa israelíes cambió y se permitió a las tropas disparar balas de plástico a fin de disolver manifestaciones o disuadir a sus instigadores en situaciones que no entrañen peligro para la vida de las fuerzas de seguridad y con miras a reducir la gravedad de las heridas. Las fuerzas de defensa israelíes dicen que las balas de plástico son menos letales que las de plomo. Si bien no hay cifras exactas, se han atribuido varias muertes a las balas de plástico y las heridas no fatales aumentaron después de la introducción de ese tipo de munición. Entre otras fatalidades cabe destacar por lo menos 13 muertes de las que no se informó, causadas por apaleamientos, y por lo menos cuatro muertes de resultas de gases lacrimógenos utilizados por las fuerzas de defensa israelíes en espacios cerrados. No se dispone de cifras exactas y los cálculos varían. Se ha informado de varios casos en que los heridos palestinos murieron de resultas de demoras de las ambulancias de las fuerzas de defensa israelíes o porque, por razones diversas, hubo demoras en el traslado de los heridos a los hospitales. En 1988 hubo cinco casos de palestinos no armados que estaban detenidos y murieron en circunstancias sospechosas o fueron evidentemente muertos por los oficiales que los custodiaban.

La tortura está prohibida por las leyes israelíes, y las autoridades israelíes dicen no condonarla. En 1987 el informe de una comisión judicial especial encabezada por el ex Presidente de la Corte Suprema Landau confirmó que Shin Bet había recurrido ilegalmente durante muchos años a presiones de índole física y psicológica para obtener confesiones de sospechosos de violar disposiciones de seguridad. El informe recomendaba que en circunstancias adecuadas se permitiera aplicar 'presiones físicas y psicológicas' en forma

limitada y claramente delineada, y procedía a definir ese tipo de presión en un anexo secreto. Continúan los informes de apaleamientos de sospechosos y arrestados y de tratos crueles y humillantes de presos y arrestados. Grupos palestinos e internacionales de derechos humanos dicen que desde la publicación del informe Landau han continuado otras prácticas tales como la de obligar a los reclusos a mantener una misma posición durante períodos prolongados, encapucharlos, privarlos del sueño y someterlos a duchas frías. Muchas de las condenas en casos relacionados con la seguridad se basan en las confesiones de los detenidos. Normalmente no se permite a los abogados ver a sus clientes hasta que se han concluido los interrogatorios. El Comité Internacional de la Cruz Roja sólo puede entrevistar a los prisioneros 14 días después de su detención.

Desde el comienzo del levantamiento, en diciembre de 1987, el número de presos palestinos aumentó de alrededor de 4.700 a 10.000. Según cifras de las fuerzas de defensa israelíes dadas a conocer el 28 de noviembre, había 5.656 palestinos en cárceles o centros de detención. Se añadieron siete centros de detención militar a los dos existentes, pero el hacinamiento sigue siendo de proporciones graves. Las condiciones varían en las diversas instalaciones de detención militar. El maltrato de los reclusos es particularmente grave en la nueva instalación de Dahariya, pero las condiciones mejoraron tras algunos cambios de personal y tras la adopción de medidas disciplinarias. A principios de 1988 se generalizó el apaleamiento de palestinos desarmados en incidentes relacionados con el levantamiento y también de personas que no participaban en actividades violentas. El 19 de enero, el ministro anunció una política de 'fuerza, imposición y palos' para acabar con el levantamiento. Posteriormente dijo que no existía una política de golpear a la gente porque sí y que algunos soldados se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes recibidas. Pero algunos médicos palestinos y de otros países, organizaciones de derechos humanos y la prensa israelí e internacional informaron a fines de enero y febrero de la proliferación de incidentes en los que tropas de las FDI utilizaron cachiporras para fracturar huesos y apalear a nacionales palestinos que no habían participado directamente en los disturbios ni se habían resistido a un arresto. Los soldados sacaban de sus casas a muchos pobladores por la noche, los hacían permanecer de pie durante horas, reunían a hombres y muchachos y los apaleaban en represalia por las pedreas. Se informó de la muerte de por lo menos 13 palestinos como consecuencia de los apaleamientos. A mediados de abril cesaron las informaciones sobre casos de fractura de huesos deliberada, pero seguían los apaleamientos encarnizados y sin justificación. El Procurador General de Israel criticó esa práctica y la declaró ilegal.

En 1988 se deportó a 36 palestinos, en comparación con nueve que lo fueron en 1987. Tales deportaciones, a juicio de los Estados Unidos, infringen las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra. La Suprema Corte de Israel aprobó una resolución censurando esa práctica.

En 1988 aumentaron considerablemente las detenciones administrativas. No es posible determinar con precisión a cuánto asciende en cada momento el número máximo de personas bajo detención administrativa, pero éste era

de 2.600 en septiembre de 1988. El Gobierno de Israel proporcionó la cifra de 1.590 a 28 de noviembre último. La mayoría estaba detenida por seis meses, aunque se reiteraba el 20% de los autos de detención. Los comandantes militares de distrito dictan las órdenes de detención administrativa. El reglamento se modificó en marzo: se suspendió transitoriamente la revisión automática de la medida de detención administrativa a las 96 horas de aplicada, tal como se establecía anteriormente, pero los detenidos pueden apelar ante los jueces militares. Para dictar la detención administrativa se utilizan a menudo como base elementos probatorios que se mantienen en secreto y no se dan a conocer a los detenidos ni a sus abogados porque, según se afirma, su carácter confidencial se debe a razones de seguridad. Esa decisión se puede apelar ante el Tribunal Superior de Justicia, que está facultado para examinar los elementos probatorios secretos, pero esa clase de decisión nunca ha sido revocada. Según cifras proporcionadas por las FDI, a comienzos en 1988 ascendía a 587 el número de casos en que se había disminuido el período de detención o ésta había sido anulada.

Las autoridades israelíes afirman que la detención administrativa se aplica únicamente a las personas que, en épocas recientes y de manera reiterada, han realizado acciones que atentan contra la seguridad, y que las opiniones y actividades políticas no son causa de detención. Empero, la definición israelí de "seguridad" es muy amplia y parece que ha habido muchos casos de personas detenidas por actividades políticas que las autoridades juzgan peligrosas para la seguridad. Se ha detenido a muchas personas, incluidos profesores universitarios, periodistas y promotores de derechos humanos, que no han llevado a cabo ni propugnado actos de violencia ni de otra índole que amenazaran la seguridad; entre los detenidos figuran muchos miembros de los comités populares, organizaciones prohibidas que apoyan el levantamiento mediante la realización de diversas actividades no violentas. Los funcionarios israelíes han confirmado que, en algunos casos, la liberación de un detenido depende de la conducta de los habitantes de la zona donde vive.

A partir de marzo, las FDI trasladaron en distintas ocasiones a más de 2.000 personas bajo detención administrativa desde los territorios ocupados hasta un campo de detención ubicado en el desierto del Neguev, cerca de Ketziot, en territorio israelí. El número máximo de detenidos en el campo ascendió en 1988 aproximadamente a 3.000, pero a finales del año se había reducido a unos 1.200. A juicio de los Estados Unidos, el traslado de prisioneros desde los territorios ocupados infringe las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra. Sin embargo, la Suprema Corte de Israel, al denegar una petición presentada por detenidos de Ketziot, declaró que las disposiciones de ese Convenio no pueden ser aplicadas por un tribunal israelí pues no se han incorporado al ordenamiento jurídico del país. Basándose en una orden de 1988 relativa a la detención militar y en un artículo de una ley de 1987 por la que se modificaron y prorrogaron las disposiciones de emergencia, la Corte declaró que los comandantes militares israelíes estaban facultados para ordenar la detención de personas dentro de Israel y que esa detención podía cumplirse en Israel si de allí había partido la orden. Las condiciones imperantes en Ketziot son rigurosas y el campo está superpoblado. Los prisioneros deben vivir en tiendas que no se prestan a reclusiones prolongadas.



Las personas arrestadas por delitos comunes en los territorios ocupados suelen tener la posibilidad de pagar una caución, consultar a un abogado y ser informadas de los cargos que se les imputan, aunque a veces se retrasa el ejercicio de esos derechos. Las personas arrestadas pueden permanecer detenidas por un máximo de 96 horas sin la orden correspondiente y hasta 18 días sin que se les imputen cargos. Entre la presentación de los cargos y el comienzo del juicio transcurren normalmente 60 días. Puede haber prórrogas de tres meses por resolución de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

A los detenidos por motivos de seguridad no se les permite, en general, que se beneficien del pago de una caución ni que consulten a un abogado durante 18 días. Las autoridades pueden, por razones de seguridad, denegar por tiempo indefinido el concurso de un asesor letrado si consideran que ello obstaculizaría la investigación. Muchos sospechosos de infringir las normas de seguridad son arrestados sin la orden correspondiente. La ley permite que, en esos casos, la detención se prolongue por un máximo de 96 horas. En ocasiones, los funcionarios se han abstenido de confirmar una detención a las autoridades consulares que pedían información sobre la suerte corrida por nacionales de sus países. Es común que no se informe de un arresto a terceras partes, incluidos los familiares más cercanos, y el período de detención puede extenderse hasta 14 días en virtud de la ley.

Las FDI han extendido considerablemente la aplicación de los toques de queda, que entrañan la permanencia de los pobladores en sus casas, en las zonas palestinas donde ha habido protestas violentas o éstas podrían, a juicio de las autoridades, producirse. Los toques de queda, a menudo prolongados, causan graves perjuicios a todos los residentes.

En función de objetivos relacionados con la seguridad, las autoridades militares pueden irrumpir en domicilios e instituciones privadas sin la orden correspondiente. En 1988 esas prácticas conllevaron a menudo apaleamientos, destrucción de bienes y detenciones. Los funcionarios encargados de la seguridad con frecuencia indagaban a los palestinos acerca de sus opiniones políticas y esos interrogatorios en algunos casos entrañaban un breve arresto.

Por lo menos 154 casas de pobladores árabes fueron demolidas o clausuradas por razones de seguridad; esos hechos afectaron a más de 1.000 personas. De las 154 casas, 101 fueron demolidas completamente, siete sólo en parte, 43 fueron clausuradas totalmente y tres solo en parte. Las autoridades israelíes realizaron esos actos luego de que los ocupantes de las casas fueran acusados de participar en incidentes relacionados con la seguridad, pero con anterioridad a su procesamiento y condena. A veces, por inadvertencia, esas demoliciones afectaron a viviendas colindantes. La decisión de demoler o clausurar una vivienda es privativa del comandante militar de zona. En Beita, aldea de la Ribera Occidental, las FDI demolieron en abril 16 casas antes de obtener los mandamientos que la ley exige. Doce de los propietarios de esas casas han aceptado las reparaciones propuestas por la administración civil, cuya cuantía oscila entre el 10 y el 100% del valor de las viviendas destruidas. Prosiguen las negociaciones con los otros cuatro propietarios.

Como parte de sus esfuerzos encaminados a poner término al levantamiento, las autoridades israelíes, citando razones de seguridad, impusieron en 1988 crecientes restricciones a la libertad de expresión y de prensa. Los palestinos consideran que esas restricciones son arbitrarias y se basan en motivos políticos. Según el derecho internacional relativo a la ocupación de un territorio, la Potencia ocupante puede restringir la libertad de expresión y de prensa. Se permitió a las publicaciones árabes - la mayoría de las cuales tienen su sede en el sector oriental de Jerusalén - el ejercicio de un cierto nivel crítico de las políticas israelíes. Por lo menos en tres ocasiones se prohibió transitoriamente la distribución en la Ribera Occidental y Gaza de la prensa árabe que se edita en el sector oriental de Jerusalén. A modo de censura previa, se exige la presentación a las autoridades militares de todos los textos de las publicaciones palestinas que tengan relación con la seguridad, el orden público y la defensa de Israel y las zonas ocupadas. En la práctica, ese requisito se define de manera muy amplia. Se ha permitido la publicación de algunas informaciones y editoriales que versaban sobre el levantamiento y las metas políticas del pueblo palestino, pero se acentuó la censura y centenares de artículos y editoriales fueron expurgados. Alegando razones de seguridad, las autoridades israelíes impusieron la detención administrativa por lo menos a 39 periodistas y directores de publicaciones palestinas y muchos otros fueron sometidos a interrogatorios. En marzo se impuso una clausura de seis meses a la agencia palestina de noticias más importante, y en septiembre se prorrogó la orden de clausura por un año. Una revista de información árabe fue clausurada por tiempo indefinido y, al menos en una ocasión, se prohibió la distribución de los cuatro diarios árabes en la Ribera Occidental y Gaza por períodos de hasta 45 días.

Se requiere un permiso para introducir publicaciones extranjeras en los territorios ocupados. Esas publicaciones pueden ser censuradas o prohibidas si se estima que tienen contenidos antisemitas o contrarios a Israel o favorables al nacionalismo palestino. Está proscrita la posesión de materiales prohibidos, por ejemplo, de panfletos relacionados con el levantamiento. Las FDI declararon periódicamente el cierre total o en parte de los territorios ocupados para impedir el acceso de los periodistas locales y extranjeros; el personal de las FDI estacionadas en los territorios suele emitir tales órdenes para impedir el ingreso de los periodistas. Las informaciones de los periodistas extranjeros están sujetas a un sistema de autocensura. Las autoridades israelíes han suspendido transitoriamente la validez de las credenciales de cinco corresponsales extranjeros por presunta violación de las disposiciones relativas a la censura.

Las autoridades israelíes clausuraron durante el año entero todas las universidades palestinas de la Ribera Occidental y Gaza, alegando que atentaban contra la seguridad porque contribuían a las acciones de violencia. Todos los establecimientos de enseñanza primaria, secundaria y profesional de la Ribera Occidental fueron clausurados por más de seis meses, es decir, por la mayor parte de los dos semestres del año escolar, pero comenzaron a reabrirse el 1° de diciembre. En Gaza las escuelas funcionaron casi todo el año escolar. Las clases que padres y maestros organizaron fuera de los establecimientos de enseñanza fueron a veces prohibidas por razones de

seguridad. Está prohibido desplegar la bandera palestina o exhibir sus colores y pintar consignas palestinas nacionalistas, pues se trata de manifestaciones públicas de apoyo a la OLP. Diferentes personas fueron detenidas o golpeadas por esos motivos u obligadas a arrear banderas palestinas y a borrar inscripciones de contenido nacionalista. Los dueños de una propiedad pueden ser multados si no eliminan esas inscripciones. Al parecer, hasta el presente no se ha acusado a nadie de tal delito. El portavoz de las FDI ha declarado que el despliegue de banderas o la posesión de literatura nacionalista, incluidos los panfletos relacionados con el levantamiento, puede interpretarse como la pertenencia a un comité popular, delito pasible de hasta 10 años de prisión.

Están prohibidos los partidos políticos y todo grupo cuya actividad se considere esencialmente política. Debe obtenerse un permiso para celebrar una reunión pública de más de 10 personas. Los palestinos suelen hacer caso omiso de esa disposición, pero en varias ocasiones las FDI han disuelto una reunión o impedido que ésta se llevara a cabo.

En 1988, los cuerpos municipales y la administración civil recortaron la prestación de servicios públicos a causa de la abrupta declinación de los ingresos fiscales motivada por las huelgas, el boicoteo a los impuestos y los trastornos económicos dimanantes del levantamiento. Como consecuencia, se acentuó el papel que las organizaciones caritativas, comunitarias, profesionales y de autoayuda de la población palestina desempeñan en la prestación de servicios sustitutivos. Las autoridades israelíes - movidas por la preocupación de que tales organizaciones estuvieran prestando apoyo al levantamiento y a la OLP, y usurpando la autoridad municipal y administrativa - tomaron medidas cada vez más estrictas para reprimirlas. Se prohibieron actividades tales como las clases a domicilio organizadas en razón de la clausura de las escuelas, así como el socorro prestado a las familias con parientes muertos, heridos o detenidos en el levantamiento. Las personas que participaban en esas actividades fueron a veces objeto de detenciones administrativas y de interrogatorios o se les denegó el permiso de circulación en la inteligencia de que apoyaban al levantamiento. La Asociación de Defensa de los Derechos Civiles en Israel expresó su preocupación por una orden militar que prohibió los comités populares, organizaciones locales que apoyan el levantamiento mediante la realización de diversas actividades no violentas. En presuntas razones de seguridad se fundamentó la clausura por un año de la Federación Sindical de la Ribera Occidental.

En la Ribera Occidental y Gaza las FDI han restringido periódicamente la libertad de circulación imponiendo un número considerable de toques de queda (1.600 en total, según Al-Haq, organización palestina de defensa de los derechos jurídicos), cuya vigencia se prolongó a menudo para desalentar las acciones de protesta. La duración de los toques de queda osciló entre unas pocas horas y varias semanas. Durante los toques de queda prolongados - salvo una semana - en general se permitió a los pobladores que salieran de sus viviendas - en procura de alimentos o de atención médica - por períodos cortos y definidos. Los toques de queda han causado graves perjuicios.

/...

Por lo menos en tres ocasiones las FDI bloquearon unas aldeas por períodos prolongados o emitieron órdenes y tomaron medidas de otra índole para impedir a campesinos y comerciantes que cosecharan y vendieran la producción agrícola o la exportaran a Jordania. Las autoridades israelíes afirmaron que se habían tomado esas medidas para persuadir a los residentes de que cesaran las pedreas y otras actividades relacionadas con el levantamiento, o para que revelaran el paradero de personas sospechosas.

Miles de palestinos de los territorios ocupados viajan al exterior cada año, pero las autoridades israelíes impusieron crecientes restricciones a la circulación en 1988. Por orden de distintos comandantes militares, se impidió a algunos militantes políticos que se trasladaran al exterior; en otros casos, las visas o salvoconductos correspondientes se otorgaron con retraso.

No hay obstáculos para emigrar. A veces Israel deniega la renovación del salvoconducto a los palestinos de los territorios que viven o trabajan en el extranjero fundándose en que han abandonado su lugar de residencia, aun cuando no hayan adquirido la ciudadanía de otro país. No se permite a quienes han adquirido otra ciudadanía que vuelvan a residir en los territorios ocupados. Sólo pueden retornar en calidad de turistas y a veces se les niega el ingreso. Al parecer, las visas de turista - cuya validez es de tres meses como máximo - se otorgan a los palestinos sobre la base del estudio de cada caso. Sólo de modo restringido se da curso favorable a las peticiones de reunificación de la familia. Por lo general, no se otorga la residencia a quienes contraen matrimonio con nacionales palestinos que habitan en los territorios ocupados.

Israel asimismo ha denegado la posibilidad de retorno a muchos palestinos de la Ribera Occidental que, por la razón que fuere, no se encontraban en los territorios en 1968 cuando se llevó a cabo el censo posterior a la guerra de junio. Los palestinos afirman que están pendientes de resolución muchos miles de peticiones de reunificación de la familia. Según el Gobierno de Israel, en 1988 se aprobaron 300 que comprendían a 607 personas. Los funcionarios israelíes admiten que la reunificación de las familias está limitada por razones demográficas y políticas y afirman que las leyes de ocupación no obligan a Israel a permitir la migración hacia los territorios ocupados. Las restricciones impuestas a la residencia, el reingreso y la reunificación de las familias no rigen para los judíos, tengan o no tengan ciudadanía israelí.

En los territorios ocupados, los colonos judíos están sujetos a la legislación israelí, mientras que para los palestinos rige la legislación israelí de ocupación militar. En virtud de este sistema dual que se aplica a palestinos e israelíes, los primeros reciben un trato menos favorable que los colonos judíos que habitan en las mismas zonas; así ocurre en una vasta gama de cuestiones, tales como el derecho a un juicio legal, el derecho de residencia, la libertad de circulación, la venta de productos agrícolas y bienes, el aprovechamiento de la tierra y el agua y el acceso a los servicios sociales y de salud. Los colonos judíos que infringieron las medidas de seguridad en general fueron tratados con más benevolencia que los palestinos culpables de delitos análogos. Es frecuente que los delitos contra ciudadanos

israelíes sean castigados con más rigor que los cometidos contra nacionales palestinos. En junio, la Suprema Corte sostuvo que el Gobierno de Israel estaba facultado para denegar la residencia y deportar a un militante político palestino nacido en el sector oriental de Jerusalén que había adquirido la ciudadanía de otro país. En virtud de la ley de retorno de Israel, los judíos conservan los derechos de residencia independientemente de que hayan adquirido una nacionalidad extranjera.

La utilización de la tierra con fines militares, los caminos, los asentamientos y otros objetivos israelíes que restringen el acceso de nacionales palestinos, discriminan a éstos y afectan negativamente sus vidas y actividades económicas. Aproximadamente el 2,5% de la superficie total de la Ribera Occidental y del sector oriental de Jerusalén ha sido entregado a nacionales israelíes para su explotación habitacional, agrícola e industrial. Los palestinos no participan en el Consejo Superior de Planeamiento, que está encargado de planificar el aprovechamiento del suelo en los territorios ocupados y que tiene determinadas atribuciones de los consejos locales, municipales y de aldea que se le delegaron en 1971."

V. Estadísticas

Cuadro 1

Cuadro de los mártires, por grupos de edades

Edad	Diciembre 1987	Enero 1988	Febrero 1988	Marzo 1988	Abril 1988	Mayo 1988	Junio 1988	Julio 1988	Agosto 1988	Septiembre 1988	Total
Menos de 10 años	-	5	4	7	4	1	3	1	2	1	26
Menos de 20 años	27	15	20	27	16	8	5	14	12	11	155
Menos de 30 años	21	20	22	28	26	7	12	14	16	15	181
Menos de 40 años	2	6	6	11	4	1	1	1	-	1	33
40 a 100 años	4	13	8	10	17	3	3	5	3	5	71
Total	54	59	60	83	67	20	24	35	33	33	468

Cuadro 2

Cuadro de los mártires por forma de muerte

Mes	Heridos con balas plásticas	Heridos de bala	Asfixia- dos con gas	Tortu- rados	Apas- tados	Electro- cutados	Asesi- nados	Secues- trados	Quemados	Ahogados	Total
Diciembre 1987	50	-	-	-	4	-	-	-	-	-	54
Enero 1988	31	6	22	-	-	1	-	-	-	-	60
Febrero 1988	45	1	8	2	2	-	-	2	-	-	60
Marzo 1988	65	1	15	-	3	-	-	1	-	-	85
Abril 1988	52	-	14	1	-	-	1	-	-	-	68
Mayo 1988	14	-	2	1	-	-	-	1	-	2	20
Junio 1988	13	-	7	3	-	-	1	-	-	1	25
Julio 1988	21	2	2	5	-	-	-	2	-	1	33
Agosto 1988	17	-	2	3	1	-	2	1	4	-	30
Septiembre 1988	22	-	3	2	3	-	-	1	-	-	31
Total	300	10	75	17	15	1	4	8	4	4	488

Cuadro 3  
Mártires. Octubre

Edad	Total	Heridos de bala	Asfixia- dos con gas	Aplastados	Apaleados y torturados
Menos de 10 años	3		3		
Menos de 20 años	16	13		2	1
Menos de 30 años	9	4	-	3	2
Menos de 40 años	6	3	1	-	2
Más de 40 años	2	1	-	1	-

Cuadro 4  
Mártires. Noviembre de 1988

Edad	Número	Heridos de bala	Asfixia- dos con gas	Apaleados	Aplastados
Menos de 10 años	2	2	-	-	-
Menos de 20 años	7	7	-	-	1
Menos de 30 años	9	8	-	1	-
Menos de 40 años	7	1	-	-	-
Más de 40 años	2	1	1	-	-
Total	27	18	1	1	1



Estadísticas de demoliciones de casas

(Noviembre de 1988)

	Número de casas	Fecha
1	18 Casa en la aldea de Tayyibah	8 de noviembre
2	08 Casa en la zona de Jiftlik - Nablus	11 de noviembre
3	08 Casas en la Faja de Gaza	11 de noviembre
4	05 Casa en la zona de Ghirdiyah - Jerusalén	12 de noviembre
5	02 Casa en la aldea de Salfit	11 de noviembre
6	01 Casa en la aldea de Sartah	11 de noviembre
7	02 Casa en la aldea de Wadi Fukin (Belén)	12 de noviembre
8	05 Casa en Wadi al-Fari'ah (Nablus)	12 de noviembre
9	08 Casas en la aldea de Agrabaniyah	11 de noviembre
10	04 Casas en la aldea de Nasraniyah	11 de noviembre
11	01 Casa en la aldea de Abu al-Haija (Dora)	11 de noviembre
12	04 Casas en la aldea de Azzun (Tulkarm)	21 de noviembre
13	01 Granja en la aldea de Azzun (Tulkarm)	21 de noviembre
14	01 Casa en la aldea de Ra's al-Fari'ah	21 de noviembre
15	03 Casas en Tubas	21 de noviembre

/...

	Número de casas		Fecha
16	01	Casa en Yamun	22 de noviembre
17	01	Casa en Jenin	25 de noviembre
18	01	Casa en la aldea de Saris (Jenin)	25 de noviembre
19	02	Casa en la aldea de Saris (Jenin)	28 de noviembre
20	04	Casa en la aldea de Khadr (Belén)	28 de noviembre
21	03	Casa en el campamento de Jalazone	28 de noviembre
22	01	Casa en Ramallah	28 de noviembre
23	01	Casa en Abud (Ramallah)	29 de noviembre
24	02	Casa en Hebrón	29 de noviembre
25	08	Casa en la zona de Jalazone	29 de noviembre
26			

6. Lista de periodistas palestinos bajo detención administrativa

1. Salah Zahuqi, 37 años de edad, de Jerusalén, redactor del periódico Al-Sha'b. Detenido en enero de 1987, pasó seis meses en la cárcel de Ramallah y fue detenido nuevamente en septiembre de 1988.
2. Na'im Tubasi, 36 años de edad, de Hebrón, corresponsal del periódico Al-Sha'b de Ramallah. Detenido en marzo de 1987 por seis meses, cumplió su sentencia, fue puesto en libertad y detenido nuevamente en noviembre de 1988. Se halla actualmente en el campamento de detención de Ansar.
3. Nabhan Karshah, 35 años de edad, de Tulkarm, corresponsal del periódico Al-Fajr. Detenido en febrero de 1987 por seis meses, puesto en libertad y detenido nuevamente en octubre de 1988. Se halla actualmente en el campamento de detención de Ansar.
4. Taha al-Mutawakkil, 31 años de edad, Presidente de la Liga de Escritores Arabes, de Qalqilya, redactor del periódico Al-Awdah. Detenido en febrero de 1987 por seis meses, puesto en libertad y detenido nuevamente en octubre de 1988. Se halla actualmente en el campamento de detención de Ansar.
5. Majid Farraj, 24 años de edad, de Belén, redactor y corresponsal de la Oficina de Prensa de Belén. Detenido en febrero de 1987. Se halla desde entonces en el campamento de detención de Ansar.
6. Adnan al-Damiri, 32 años de edad, de Tulkarm, corresponsal del periódico Al-Awdah antes de su clausura. Detenido desde marzo de 1987. Se halla actualmente en el campamento de detención de Ansar.
7. Abdullah Awad, 36 años de edad, de Ramallah, miembro de la junta de redacción del Al-Bayadir al-Siyasiyah. Detenido a mediados de 1987 y aún no liberado; se le acusa de atentar contra la seguridad del Estado. El sindicato desconoce el actual paradero del detenido.
8. Basim Safikhat, 26 años de edad, corresponsal del periódico Al-Fajr, de Tulkarm. Detenido el 2 de marzo de 1988. Se halla actualmente en el campamento de detención de Ansar.
9. Ahmad Tawatah, 32 años de edad, de Bayt Fakhkhar, corresponsal de la Oficina de Prensa de Belén. Detenido en marzo de 1988, cumple su sentencia en el campamento de detención de Ansar.
10. Mahmud Rimahi, 42 años de edad, corresponsal del periódico Al-Fajr de Ramallah, residente del campamento de refugiados de Jalazone. Condenado a cinco años de cárcel por problemas de seguridad. Se halla actualmente en una cárcel cerca de Nablus.
11. Musa Taradat, 38 años de edad, de Sa'ir cerca de Hebrón, corresponsal del periódico Al-Fajr. Detenido en junio, puesto en libertad y detenido nuevamente en noviembre de 1988. Se halla todavía en el campamento de detención de Ansar.

12. Hasan Abdullah, 40 años de edad, de Jerusalén, corresponsal del periódico Al-Natiq antes de su clausura. Condenado a tres años de cárcel, acusado de atentar contra la seguridad en 1986. Se halla todavía en el campamento de detención de Ansar.
13. Nayef Suwaytat, 31 años de edad, de Jenin, corresponsal del periódico Al-Fajr. Detenido en el campamento de Ansar desde mayo de 1988.
14. Hatim Abd al-Qadir, 34 años de edad, de Jerusalén, redactor del periódico Al-Fajr. Detenido en mayo de 1988, puesto en libertad y detenido nuevamente en octubre. Se halla actualmente en el centro de detención de Beersheba.
15. Taba! Abu Afifi, 33 años de edad, de Shu'fat, redactor del periódico Al-Fajr. Detenido en junio, puesto en libertad y detenido nuevamente menos de un mes después en julio. Se halla actualmente en la cárcel de Ramallah.
16. Muhammed Abu Labdah, 35 años de edad, de Jerusalén, miembro de la junta de redacción del Al-Fajr, miembro de la administración del Sindicato de Periodistas Palestinos. Detenido en noviembre por nueve días, puesto en libertad y detenido nuevamente. Se halla actualmente en el campamento de detención de Ansar.
17. Salah Al-Dayri, 38 años de edad, de Belén, propietario de la Agencia de Prensa de Belén. Detenido en agosto de 1988.
19. Musa Qaws, 30 años de edad, de Jerusalén. Detenido en agosto de 1988 y amenazado con deportación. Se halla en el campamento de detención de Ansar.
20. Rida Zawriyah, 30 años de edad, de Nablus, periodista local. Detenido en octubre de 1988. Se halla actualmente en el campamento de detención de Ansar.
21. Rizq Bayari, 28 años de edad, de Gaza, corresponsal del periódico Al-Sha'b. Detenido el 2 de agosto de 1988. Se halla actualmente en el campamento de detención de Ansar.
22. Jamal Faraj, 27 años de edad, del campamento de Dheisheh, periodista local. Amenazado con deportación, detenido en agosto de 1988. Se halla actualmente en el campamento de detención de Ansar.
23. Hasan Sarandah, 35 años de edad, de Jerusalén, corresponsal del periódico Al-Sha'b. Detenido en agosto de 1988. Se halla actualmente en el campamento de detención de Ansar.
24. Hisham Abu Ruma, 33 años de edad, de Tulkarm, corresponsal del periódico Al-Fajr. Se halla en el campamento de detención de Ansar desde junio de 1988.

**Nota:** Con excepción de Abdullah Awad y Mahmud Rimahi, que han sido sometidos a juicio, los demás periodistas mencionados se hallan bajo detención administrativa.

-----